

X Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia. Escuela de Historia de la Facultad de Humanidades y Artes, Universidad Nacional del Rosario. Departamento de Historia de la Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad Nacional del Litoral, Rosario, 2005.

La Asamblea Popular Boliviana.

Hernández, Juan Luis.

Cita:

Hernández, Juan Luis (2005). *La Asamblea Popular Boliviana. X Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia. Escuela de Historia de la Facultad de Humanidades y Artes, Universidad Nacional del Rosario. Departamento de Historia de la Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad Nacional del Litoral, Rosario.*

Dirección estable: <https://www.aacademica.org/000-006/787>

Acta Académica es un proyecto académico sin fines de lucro enmarcado en la iniciativa de acceso abierto. Acta Académica fue creado para facilitar a investigadores de todo el mundo el compartir su producción académica. Para crear un perfil gratuitamente o acceder a otros trabajos visite: <https://www.aacademica.org>.

X JORNADAS INTERESCUELAS/DEPARTAMENTOS DE HISTORIA

Rosario, 20 al 23 de septiembre de 2005.

Título: **La Asamblea Popular Boliviana**

Mesa Temática Nro. 84: “Estructuras, sujetos y procesos en América Latina contemporánea (Siglo XX)”

Autor: Juan Luis Hernández

Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras.

Licenciado en Historia

Docente Auxiliar Cátedra Problemas Latinoamericanos Contemporáneos.

Dirección: Sanchez de Bustamante 444 – 17 E

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Teléfono: 4862-8242

E-mail: jlhernandez@africamail.com

Introducción

En los primeros años de la década del '70, se suceden en América del Sur tres experiencias de construcción de organismos de doble poder: la Asamblea Popular en Bolivia, los cordones industriales en Chile (1972/1973) y las coordinadoras interfabriles en la Argentina (1975). Con excepción del caso chileno, la Asamblea Popular y las Coordinadoras Interfabriles han sido muy poco estudiados, contándose casi exclusivamente con los testimonios de algunos de los protagonistas y los artículos producidos por los periodistas. En lo que respecta a la Asamblea Popular, esta situación se agrava por el muy escaso tiempo en que funcionó, y la carencia de fuentes documentales, ya que no existen actas o registros de las deliberaciones, sino solamente algunos documentos fundamentales. Nuestro propósito es, entonces, intentar reconstruir los acontecimientos, el funcionamiento de la Asamblea y las interpretaciones de protagonistas e historiadores, para esbozar luego algunas conclusiones provisorias.

Los antecedentes

El golpe de noviembre de 1964 es considerado habitualmente como el fin de la revolución boliviana. Sin embargo, la revolución terminó antes pero también después de ese 4 de noviembre: antes, porque la capacidad de innovación y transformación social se había agotado tras los primeros años revolucionarios; y después, porque la economía boliviana, el marco jurídico, los hábitos políticos, seguían respondiendo al proceso abierto en abril de 1952.

En este contexto, Barrientos, un militar con antigua militancia movimientista y formación profesional pro-norteamericana, continuó en lo esencial con la política del MNR: aislar y reprimir al movimiento obrero, profundizar los acuerdos con las dirigencias campesinas adictas (Pacto Militar-Campesino). En mayo de 1965 el ejército ocupó militarmente todos los campamentos mineros, disolviendo la FSTMB, la COB, encarcelando y asesinando a decenas de activistas y dirigentes; acto seguido procedió a efectuar un recorte salarial mayúsculo. Barrientos heredó la red clientelística forjada por el MNR en el campo, continuando con la reforma agraria. En un país con nulas glorias militares, su gobierno obtuvo un éxito resonante en la campaña contra la guerrilla encabezada por el Che Guevara. Pero la experiencia guerrillera tuvo un efecto impensado: contribuyó a generar un debate en los círculos politizados, estudiantiles y sindicales del país, que pronto se extendió a las capas medias urbanas, al tiempo que se producía una recomposición del movimiento obrero, palpable en las luchas por aumentos salariales y recuperación de conquistas anuladas que comenzaban lentamente a extenderse.

Cuando en abril de 1969 el helicóptero Holofernes se precipitó a tierra, y entre sus hierros retorcidos encontró la muerte el general René Barrientos, concluyó un gobierno cuyo tiempo político hacía rato estaba agotado. Cinco meses después, Alfredo Ovando, decide cambiar el rumbo político. En un documento denominado “Mandato revolucionario de las Fuerzas Armadas de la Nación” se ponen de manifiesto los objetivos del nuevo gobierno: para luchar exitosamente contra la implementación de nuevos focos guerrilleros, era necesario luchar por el desarrollo del país, contra el atraso y la dependencia. Redactado por el nuevo comandante del ejército y líder de su facción nacionalista, el general Juan José Torres, el documento procuraba trazar una línea que uniera el legado de la revolución del 52 (y sus antecedentes nacionalistas, Busch y Villarroel) con los lineamientos más importantes de los gobiernos militares posteriores al '64. Al frente de un gabinete ecléctico, donde convivían Mariano Baptista Gumucio (movimientista), Marcelo Quiroga Santa Cruz (izquierdista) junto a militares derechistas como el coronel Juan Ayoroa, Ovando decretó, el 7 de octubre de 1969, la nacionalización de la Gulf Oil, compañía norteamericana que había crecido enormemente durante la época de Barrientos, llegando a tener el 82 % de la cuota de producción de petróleo en Bolivia. La medida fue aplaudida por la COB, los estudiantes y los trabajadores petroleros, mientras el gobierno de Estados Unidos consintió la nacionalización pero exigió el pago de una fuerte indemnización. En las semanas y

meses siguientes el gobierno tomó otras medidas: anuló leyes petroleras, restableció el monopolio sobre la venta de minerales en manos del Banco Minero, estableció relaciones diplomáticas con la URSS y otros países del este europeo, ingresó al Pacto Andino. En lo político, el gobierno de Ovando derogó la ley de seguridad, levantó la censura, legalizó a la COB y a los partidos de izquierda.

En este contexto se realizó, en mayo de 1970, el decisivo IV Congreso de la COB. Si bien Lechín fue reelegido como presidente, su influencia había decaído mucho, al punto que la verdadera conducción de la FSTMB y de la COB eran atribuidas al trío Víctor López (independiente), Simón Reyes (PCB) y Filemón Escobar (POR). En este congreso se tomaron dos resoluciones trascendentes. En primer lugar se votó una tesis política, sobre la base de un documento presentado por el POR, el cual contó con el apoyo del PC a partir de la incorporación de diversos anexos, agregados al documento. La tesis -que algunos consideran un “documento híbrido”-¹ se pronunciaba en general por la independencia política de la clase obrera y por la conexión de la lucha antiimperialista y la lucha por el socialismo. La segunda decisión fundamental fue la voluntad de establecer un comando político, formado por todos los partidos de la izquierda, la COB y los principales sindicatos, el cual actuaría como la dirigencia política del movimiento popular conforme los puntos programáticos proclamados en la tesis de la COB.²

Pocas semanas después, el gobierno de Ovando inició un giro a la derecha, que se acentuaría en los meses siguientes. El alejamiento de Quiroga Santa Cruz del gabinete, y el reemplazo de Torres por el general Miranda en la cúspide del ejército fueron los primeros avances de la derecha militar. Siguió ataques a los derechos democráticos, perpetrados por elementos vinculados al ministro de interior Ayoroa, que culminaron en un asalto a la Universidad perpetrado por una banda de paramilitares. La represión a la guerrilla de Teoponte marcó otro giro derechista del gobierno. Los militares ejecutaron a los guerrilleros capturados en el lugar a pesar de las órdenes de Torres y Ovando de

¹ Dunkerley, p. 213.

² La tesis de 1970 tenía una *Plataforma de Lucha*, que entre otras cosas planteaba: aumento salarial, reincorporación de los despedidos, nacionalización de las minas privadas sin indemnización, control obrero con poder de veto, libertades democráticas plenas, monopolio estatal del gas y de la gasolina, autonomía universitaria, profundización de la reforma agraria, socialización de la medicina y de la universidad, expulsión de la misión militar, la CIA y el Cuerpo de Paz, creación de un frente revolucionario antiimperialista, un gobierno de los obreros y el socialismo, relaciones diplomáticas con Cuba.

respetar sus vidas, el propio Osvaldo “Chato” Peredo logró eludir la captura y posterior fusilamiento gracias a la movilización de la población local.³

En este contexto, la derecha militar creyó llegado el momento de destituir a Ovando, evaluando que la política de distensión iniciada por éste en setiembre de 1969 había llegado demasiado lejos. El golpe estalló el 4 de octubre de 1970, dirigido por Miranda, quien anunció la destitución de Ovando y su propio ascenso a la presidencia. Sin embargo, varios contingentes militares no se plegaron al golpe, otros brindaron su apoyo a Ovando, y otros, como el Segundo Batallón de los Colorados, al mando del mayor Rubén Sánchez, hombre de Torres, se opusieron firmemente. Ovando negoció con Miranda en El Alto, el 6 de octubre ambos resolvieron retirarse y entregar el poder a un triunvirato compuesto por los jefes de las tres fuerzas armadas. Sin embargo, apareció una nueva opción: el general Torres, con el apoyo de la fuerza aérea, los Colorados y otras unidades se instaló en El Alto desafiando a la junta, que no lograba concitar mayores consensos. En estas circunstancias, el Comando Político convocó a una huelga general para el 7 de octubre en contra de la asunción de la junta militar. La huelga, que contó con gran adhesión popular, inclinó la balanza de fuerzas a favor de Torres, quien el mismo 7 asumió el poder en medio de la algarabía popular.

El gobierno de Torres

Inmediatamente, Torres invitó a la COB a participar de su gobierno, ofreciendo primero la tercera parte y luego la mitad de los cargos del gabinete. La COB aceptó a regañadientes, proponiendo como ministros obreros a figuras sindicales de segunda línea, por lo cual el gobierno finalmente retiró su oferta.

El objetivo de Torres era lograr un verdadero control sobre las empresas productivas, aumentar la participación estatal en una economía mixta y limitar y reglamentar claramente las actividades del capital extranjero. Una de sus primeras medidas fue la autorización de un aumento salarial reclamado por la FSTMB, que exigía reponer el salario a los valores anteriores a mayo de 1965. La otra demanda de los mineros, el cogobierno (participación obrera en la administración de las minas) con poder de veto quedó a consideración del gobierno para más adelante.

Durante todo su gobierno, se produjo una gran cantidad de ocupaciones de edificios y propiedades: empresas privadas, sede de diarios y revistas, locales ocupados por

³ Dunkerley, p. 218.

entidades norteamericanas. El gobierno no reprimía estas ocupaciones, intentaba negociar con los trabajadores y estudiantes que las motorizaban con distinto resultado.

También desde el principio se manifestó una fuerte oposición militar al gobierno, encabezada por dos coroneles, partidarios del grupo de Miranda: Hugo Bánzer y Edmundo Valencia. El 10 enero de 1971 ambos militares tomaron el Estado Mayor del Ejército y se declararon en rebeldía. La mayoría de los oficiales no adhirieron al pronunciamiento, la fuerza aérea y los colorados se mantuvieron leales al gobierno y atacaron a los golpistas, la COB declaró la huelga general y miles de mineros armados confluyeron sobre el centro de La Paz anulando cualquier posibilidad de respaldo a la rebelión. La rebelión fue derrotada en forma mucho más aplastante que la protagonizada por Miranda en octubre de 1970.

La derrota de la intentona de enero de 1970 fue el principio de un nuevo auge de la movilización de masas y de radicalización de la situación política, y en los meses siguientes los acontecimientos se precipitaron. El gobierno, bajo la constante presión de la COB y la movilización popular, desmontó las medidas más impopulares del gobierno de Barrientos: renacionalizó las colas y desmontes de Catavi que había sido cedidas a empresas privadas para su explotación; nacionalizó la mina Matilde, importante centro minero explotado por una compañía norteamericana; expulsó el Cuerpo de Paz (fuerza integrada por voluntarios norteamericanos); canceló el contrato de “Guantanamo”, como se denominaba una base de rastreo de satélites que Barrientos había cedido a E.U. En este clima se conforman nuevas organizaciones políticas. Uno de ellos era el Partido Socialista (PS), creado el 1º de mayo a partir de la fusión de pequeños grupos, cuyo principal dirigente era Marcelo Quiroga Santa Cruz, con un discurso fuertemente antiimperialista expresado en términos marxistas. Otro, el Movimiento de izquierda Revolucionaria (MIR), constituido a fines de mayo, cuyos dirigentes más conocidos eran Jaime Paz Zamora y René Zavaleta Mercado, que posteriormente hará un viraje muy grande hacia la derecha pero que en aquella época tenía posiciones muy radicalizadas. También continuaban actuando el Ejército de Liberación Nacional, y el maoísmo a través del Partido Comunista Marxista Leninista (PCML), que preconizaban acciones armadas y la guerra popular. La reconfiguración de la izquierda, que en otros países sudamericanos tendrá lugar desde principios de los '60 bajo el influjo de la revolución cubana, en Bolivia tendrá lugar en años posteriores, mediada por la elaboración del significado del '52, el nacionalismo movimientista y la experiencia del Che.

La Asamblea Popular en funciones

El 1º de mayo de 1971, en el marco de una imponente manifestación obrera y popular, el Comando Político planteó la constitución de “un órgano de los trabajadores y del poder popular” completamente independiente del gobierno. Así nació la Asamblea Popular, organismo que se autodefinirá como un Frente Antiimperialista dirigido por el movimiento obrero y que se reuniría por primera vez el 22 de junio. La Asamblea reconoció como sus documentos constitutivos la Tesis política de la COB de mayo de 1970, las Bases Constitutivas y el Reglamento de Debates. Estos últimos fueron aprobados en las primeras sesiones de la Asamblea, a partir de borradores elaborados en las semanas posteriores al 1º de Mayo por el Comando Político. En ellos se establece la composición de la Asamblea, que para garantizar la hegemonía proletaria otorgaba a los los fabriles y mineros una participación de 132 delegados, 53 a las clases medias urbanas, 23 a los campesinos y 13 a los partidos de izquierda. El tema central de discusión sobre la composición de la Asamblea es sin duda la escasa participación que se les asignó a los delegados campesinos.

La Asamblea sesionó durante diez días, del 22 de junio al 2 de julio. Lechín fue elegido presidente, enfrentando una alianza del PC y del POR, pero desde un inicio quedó claro que era la izquierda la que llevaba la voz cantante y la que ganaba la mayoría de los debates. Además de los estatutos, la Asamblea votó tres documentos:

1. Resolución contra el golpe fascista, a partir de un proyecto presentado por Lora. Planteaba declarar la huelga general con ocupación de fábricas y minas ante el estallido de un golpe, y la formación de un comité de la Asamblea (Comité de Milicias y Tribunales Populares) que asumiría la dirección política militar de la lucha.
2. Sobre la cogestión en las minas: Coparticipación obrera mayoritaria en COMIBOL, con elección de los gerentes por los trabajadores.
3. Universidad única bajo la dirección hegemónica del proletariado. Se pretendía seguir el ejemplo de la Universidad de Potosí, cuya dirección estaba compuesta por 19 delegados obreros, 9 estudiantiles y 9 docentes, colocando la actividad universitaria en el marco de una alianza obrero-estudiantil con hegemonía obrera.

En la Asamblea se desarrollaron varios debates importantes. El primero de ellos tuvo que ver con la lucha contra el golpe militar. Al decidir que un Comité surgido de la Asamblea asumiera la dirección de la lucha, se estaba ratificando la independencia del organismo respecto del gobierno de Torres, pero esto no cerró el debate. La discusión

volvió a abrirse al tratarse la cogestión en las minas. El MIR, los maoístas, los delegados estudiantiles cuestionaron el informe sobre la coparticipación mayoritaria obrera, sosteniendo que esto implicaba peligros de burocratización (como había sucedido en el pasado) y que iba a desviar la atención de los obreros del problema principal, que era la toma del poder por las masas populares. El POR, el PC y los delegados de la FSTMB sostuvieron que para llevar a cabo la cogestión obrera mayoritaria era necesario la movilización revolucionaria de los trabajadores y sus organizaciones de base, y que ésto además planteaba la reorganización económica del país, al incluir dentro de COMIBOL fundiciones, empresas de transporte, el Banco Minero, etc. Frente a quienes insistían en la necesidad de construir un aparato militar de la Asamblea, para Lora el problema fundamental era profundizar la movilización de las masas, si estas se ponían en marcha para luchar por consignas revolucionarias comprenderían rápidamente la necesidad de su armamento para vencer al gobierno y a la derecha, y de esta manera tomar el poder. También se cuestionó la escasa participación otorgada a las organizaciones campesinas, centrada casi exclusivamente en la Confederación Independiente de Campesinos de Bolivia (18 sobre 23 delegados). La respuesta del POR y de otros grupos de izquierda remitía a que la mayoría de las organizaciones campesinas estaban en manos de dirigencias comprometidas con el Pacto Militar-Campesino. También señalaban que no se podía proceder de acuerdo al peso “demográfico” de cada sector, sino a criterios relativos a la capacidad de cada clase en la lucha por la emancipación social, en este sentido defendían el otorgamiento del 60 % de los delegados, en todas las instancias de la Asamblea (plenarios, comisiones, etc.) a la clase obrera.

El 2 de julio se clausuraron las sesiones de la Asamblea Popular, habiéndose previsto volver a funcionar en dos meses. Durante ese lapso, mientras los representantes volvía a sus lugares de base a recabar mandato, el Comando Político asumía la dirección del proceso, encargándose de convocar Asambleas Populares a nivel regional en el interior del país, en tanto el Comité de Milicias y Tribunales Populares proseguía los trabajos preparatorios para la constitución de los mismos. El receso de la Asamblea dió la oportunidad y el tiempo a la derecha para preparar un nuevo golpe.

El desenlace

El centro de los planes desestabilizadores estaba instalado en Santa Cruz, donde poderosas compañías norteamericanas explotaban el algodón y el azúcar, cuyos cultivos y plantas procesadoras estaban incluidos en futuros planes de nacionalización. La

desestabilización del gobierno de Torres comenzó con huelgas y retenciones de servicios de transporte, aumento de precios y desabastecimiento de productos básicos de la canasta familiar. Luego de las sesiones de la Asamblea, se fueron escalonando los apoyos políticos al golpe. El MNR y la Falange Socialista cerraron filas tras el liderazgo de Banzer, a quien acompañaban también el Opus Dei, los francmasones, Cámaras de Comercio, jerarquías eclesiásticas. A ellos se sumaron diplomáticos extranjeros (el cónsul brasileño en Santa Cruz, el embajador argentino, etc.) y la embajada estadounidense. En julio trascendió un pronunciamiento clandestino de los suboficiales del ejército, que tuvo efectos importantes en la adhesión de muchos oficiales a Banzer, atemorizados ante el avance de la influencia izquierdista en las filas de las Fuerzas Armadas.

El golpe se inició el 18 de agosto cuando Banzer fue detenido en Santa Cruz y trasladado a La Paz. No obstante el traspie inicial, Andrés Selich al frente de los golpistas toma Santa Cruz el 19 -con abierta colaboración brasileña- luego de sangrientas refriegas donde mueren más de 100 personas. Entre el 20 y el 21 se libró la lucha decisiva en torno de La Paz. Si bien la Fuerza Aérea se abstuvo de apoyar el golpe hasta último momento, el único regimiento que luchó al lado del presidente hasta el final fueron los Colorados del mayor Sánchez, las demás unidades o se plegaron al golpe o permanecieron a la espera de los acontecimientos.

El Comando Político había declarado la huelga general, y en la noche del 20 una delegación se entrevistó con Torres para pedirles armas. Según Lora, Torres se negó a distribuirlas, alegando que de todos modos no quedaba ninguna en su poder.⁴ Los trabajadores decidieron tomar los almacenes centrales del ejército, pero sólomente encontraron unos 1200 máusers antiguos y escasa munición.⁵ Junto a los Colorados, lucharon heroicamente todo el 21 de agosto, pero fue en vano. Por la noche, Banzer asumía como presidente, mientras seguían los estruendos de las bombas y las ametralladoras contra la Universidad de San Andrés, que resistió 48 horas más. Los trabajadores y los estudiantes sufrieron en estas jornadas una de las peores derrotas de su historia.

⁴ La versión de Torres sobre la entrevista difiere sustancialmente de la de Lora. Según él sus interlocutores le expresaron por primera vez su más enérgico apoyo como conductor de la lucha contra el golpe fascista. "El presidente Torres relata como se produjeron los hechos", en Cuadernos de Marcha Nro. 51, Julio 1971.

⁵ Dunkerley, 247

Debates e interpretaciones

A pesar de que solo alcanzó a sesionar 10 días, la Asamblea Popular dejó una huella importante en la historia de Bolivia. En el centro de los debates que ha inspirado se encuentra el de su propia naturaleza. ¿Se trató de una criatura inefectiva e irrelevante pergeñada por ideólogos izquierdistas o fue una auténtica creación de las masas bolivianas en la lucha por su autoorganización?

El general Torres, y diversos funcionarios del gobierno nacionalista que presidía, estuvieron entre quienes impulsaron la primera hipótesis. La Asamblea constituyó el escenario en el que los dirigentes izquierdistas dieron rienda suelta a sus habituales discusiones ideologistas, sin atender los problemas que debía enfrentar el proceso revolucionario en el país. En la entrevista que ya hemos mencionado, reproducida por la revista *Marcha*, Torres remarcará que recién en las vísperas del 21 de agosto obtendría el apoyo de los representantes de los partidos revolucionarios y de las organizaciones sociales, que hasta entonces solo le habían prodigado desconfianza y críticas abiertas o encubiertas.⁶

Rogelio García Lupo, periodista argentino especialista en temas latinoamericanos, será quien mejor sintetice esta mirada sobre los acontecimientos bolivianos. En “Los fusiles y los tanques”, título del artículo con el cual abre el valiosísimo dossier reunido en Cuadernos de *Marcha* Nro. 51 (1971), sostendrá que en el proceso boliviano se cometieron errores importantes. El funcionamiento de la Asamblea Popular, y la proclama de los cabos y sargentos del ejército, días antes del golpe de agosto, fueron los más serios:

“La Asamblea Popular pasó ante la escena política boliviana como un ensayo de doble poder, el agrupamiento de los cabos y sargentos como un embrión de soviets. No fueron, naturalmente, ni una ni otra cosa.”⁷

En la Asamblea Popular se habría hablado excesivamente de socialismo. El manifiesto de los cabos y sargentos, planteando la disolución del ejército, y su reemplazo por una formación militar del pueblo de la que ellos se ofrecían como elementos técnicos, habría

⁶ “Al borde de la catástrofe, los bolivianos abrían los ojos y comprendían, aunque tarde, que la victoria dependía de la cohesión y coordinación de todos los patriotas. Las fuerzas populares dispersas y desunidas acabaron por comprender que mi gobierno era su gobierno y que mi derrocamiento era también el suyo....Jamás se entendió cabalmente la lucha que sostenía el gobierno revolucionario....Sólo cuando los enemigos nacionales e internacionales del pueblo boliviano se quitaron la máscara, se me otorgó poder y se me garantizó disciplina y sacrificio.” J. J. Torres, ob. cit, p. 92

⁷ Rogelio García Lupo, p. 3.

galvanizado a los oficiales detrás de Banzer, especialmente después que Torres recibiera en su despacho a algunos de esos suboficiales.

En esta misma perspectiva, una posición más elaborada es la de Mario Lozada. En el fascículo “Nacionalismo, socialismo y clase obrera en Bolivia” (1974), Lozada hace un balance negativo de la posición de la COB al no aceptar el ofrecimiento de Torres de integrar su gabinete apenas había asumido el poder. Sostiene que una opción posible era aceptar el ofrecimiento y luchar desde adentro del gobierno para imponer el programa de la COB. Esto hubiese implicado en su opinión un cambio en la relación de fuerzas, al generarse una alianza entre la clase obrera y las tendencias nacionalistas del ejército, pero no fue comprendido ni le interesaba a la izquierda. Critica tanto al POR y su tradicional concepción leninista de la insurrección como al ELN que se negaba a hacerse ilusiones con una mudanza de gobierno producto de un golpe de estado. Su opinión sobre la Asamblea Popular es profundamente negativa. La concibe como una suerte de parlamento obrero, que había aterrorizado a la derecha, alarmada por el curso de los acontecimientos:

“...la asamblea dió paso a un parlamentarismo y verbalismo revolucionario que evidentemente no es factor de organización. Los pronunciamientos, los discursos, los llamados sirvieron para espantar a la reacción y afirmarse en el golpe...”⁸

Desde la izquierda, se hará una lectura distinta. El común denominador, desde las posiciones más reformistas o moderadas, hasta las más radicales, es considerar a la Asamblea Popular como una de las experiencias más ricas de la clase obrera y las masas populares bolivianas.

Entre 1972 y 1974 tendrá lugar una larga polémica entre Guillermo Lora y René Zavaleta Mercado, quienes desarrollarán algunos de los temas debatidos años antes en el ámbito de la Asamblea, en la que ambos participaron como delegados del POR y del MIR, respectivamente. La polémica es importante y sumamente rica en informaciones y reflexiones para el estudio de este proceso, aunque por momentos, el debate es confuso y está teñido de mucho sectarismo por ambas partes.

Lora sostiene que la Tesis Política de la COB y las Bases Constitutivas de la Asamblea Popular estaban inspirados en la concepción de la revolución permanente y la tesis de Pulacayo. Expresa en forma categórica que la Asamblea Popular fue un soviét desde sus mismos inicios, criticando a quienes la consideran un órgano de doble poder solo en

⁸ Lozada, p. 94.

potencia. Este es el inicio de una ardua polémica teórica, en la que Lora criticará a quienes afirman que el poder obrero existe solo cuando es capaz de imponer sus decisiones (o está en condiciones de vencer a sus adversarios). Para él habrá dualidad de poderes en tanto los órganos de la clase adoptan medidas por su cuenta y al margen de la voluntad de los gobernantes y del ordenamiento jurídico imperante. Argumentará que la dualidad de poderes es una tendencia natural que asume la lucha de clases al radicalizarse la lucha del proletariado, al tomar éste la resolución de los problemas obreros y nacionales en sus propias manos, al crecer la influencia de los órganos de doble poder creados por los trabajadores frente a los correspondientes al estado oficial. Esta dualidad de poderes no dura indefinidamente, se resolverá “por la victoria del creciente poder obrero sobre el gobierno oficial o por su aplastamiento.”⁹

El balance que ofrece Zavaleta Mercado de los sucesos de 1970/71 es más matizado. Admite que la experiencia de la Asamblea Popular fue muy superior a la de 1952, en particular por “La defensa exitosa de la supremacía obrera dentro de la alianza de clases que expresaba la Asamblea...”¹⁰ En contrapeso, el ejército no estaba derrotado ni destruido como veinte años antes, estaba dividido en distintas fracciones, pero conservaba sus armas y su capacidad de represión. La Asamblea, una suerte de estado proletario sin su brazo armado, demoró en plantearse el problema del armamento. En esas condiciones, si bien la Asamblea tenía rasgos de soviet, no había dualidad de poderes, que en opinión de Zavaleta Mercado solo existe cuando hay dos estados enfrentados, cada uno con su respectiva conducción política estratégica y sus destacamentos armados,

“Por eso decimos que 1971 fue, nuevamente, un embrión avanzado de poder dual y no propiamente un poder dual, un esbozo y no la figura misma.”¹¹

También inspirado en la tradición marxista, Adolfo Gilly escribirá años más tarde un texto en el que hace una actualización de las discusiones sobre el poder obrero en las sociedades post-capitalistas y de las relaciones clase-partido-estado. La peculiaridad de su análisis es el desarrollo de una hipótesis sobre el poder dual a partir del carácter doble y contradictorio de la organización obrera en la fábrica capitalista. Los trabajadores, según Gilly, deben organizarse para luchar por mejorar el precio de venta de su fuerza de trabajo, y al mismo tiempo, enfrentarse con el capital en su carácter de

⁹ Lora, p. 25.

¹⁰ Zavaleta Mercado, p. 104.

¹¹ Zavaleta Mercado, p. 106.

director despótico del proceso productivo. En esta lucha nacen los consejos de fábrica. Por un lado serán la base de la lucha por mejores salarios y condiciones de trabajo, canalizadas a través de los sindicatos dentro del marco jurídico establecido. Por otro lado, al enfrentar al capital en lo concerniente a la organización del proceso productivo al interior de la fábrica devienen embriones de doble poder, por ser “depositarios de la soberanía obrera en la producción”, aunque pocas veces esa dualidad de poderes en la fábrica emerge como dualidad de poderes frente al estado. Gilly analiza tres experiencias de consejos obreros: las comisiones internas argentinas en 1945, los sindicatos mineros bolivianos en 1952 y los consejos de fábrica italianos en 1969, “aunque sólo una de ellas adoptó ese nombre clásico y ninguna llegó a desafiar centralizada y conscientemente el poder del Estado”.¹² Con respecto a los sindicatos mineros bolivianos, su análisis está centrado en la experiencia del 52. Registra el carácter peculiar de las organizaciones de base mineras, cuyo funcionamiento estaba basado en asambleas democráticas, con la participación del minero y de su familia, involucradas en todos los aspectos de la vida cotidiana, y el carácter fuertemente politizado del movimiento minero. Lamentablemente, no habla de la Asamblea Popular, solo menciona que “el punto máximo” alcanzado por los mineros es el programa socialista aprobado por el IV Congreso de la COB en mayo de 1970, que sin embargo tiene sus carencias:

“No alcanzaron a materializar la necesidad de un partido obrero, distinto del nacionalismo revolucionario todavía dominante a escala nacional, sin cuyo partido no se podía organizar la lucha política por aquel programa”.¹³

La bibliografía existente sobre la historia social y política boliviana en la segunda mitad del siglo XX ha dedicado muy poco espacio a la experiencia de la Asamblea Popular. James Dunkerley se refiere al tema en el capítulo 5 de su obra, presentándolo como un aspecto de la crisis de hegemonía operada en Bolivia entre 1969 y 1971. Si bien considera que fue “un intento consciente y práctico de la izquierda” por construir una política capaz de superar la experiencia de 1952, concuerda con quienes sostienen que las circunstancias determinaron que se tratara de un experimento superficial, por lo cual gran parte de las discusiones se tornan abstractas o irrelevantes.¹⁴

¹² Gilly, p. 148.

¹³ Gilly, p. 161.

¹⁴ Dunkerley, p. 238.

Recientemente, un autor francés, Jean Baptiste Thomas, escribió una tesis de maestría sobre la experiencia del movimiento obrero en Bolivia, entre 1969-1971. Su aporte más original consiste en sostener que hasta ahora la mítica Asamblea Popular había concitado toda la atención de los estudiosos, pero en realidad la Asamblea instaurada en La Paz era de hecho, el “reflejo burocrático” de las “tendencias soviéticas y del doble poder local” presente en el interior del país a partir de la crisis de octubre de 1970. Thomas registra la aparición de comités en Tarija, Cochabamba, Oruro, Sucre, y distintos lugares del Oriente boliviano, desmintiendo de esta manera (e invirtiendo) las ideas de Lora o de Zavaleta Mercado, quienes sostuvieron que por falta de tiempo y recursos la dirigencia nacional de la Asamblea y de la COB no pudieron recorrer el país para impulsar la formación de Asambleas regionales.¹⁵

Conclusiones

La Asamblea Popular se inscribe en el ciclo abierto por la revolución del 52, y en las elaboraciones colectivas que la misma diera lugar en la conciencia de los explotados del altiplano. No se trató de un parlamento obrero, o de un espacio deliberativo de los partidos de izquierda. Reunía dos características que lo diferenciaban claramente de un proyecto de este tipo. Por un lado sus integrantes eran designados por las organizaciones de base, por voto directo en asamblea, y llevaban un mandato imperativo, restringiéndose lo más posible la delegación de poder. Por el otro lado intentaba concentrar en sí misma las funciones deliberativas y ejecutivas, rasgo típico de las organizaciones basadas en la democracia directa. En definitiva se trató de un intento conciente de construir una alternativa de poder popular hegemonizado por los trabajadores, frustrado por el golpe preventivo de Banzer -apoyado por el MNR y la Falange Socialista- y detrás del cual se encolumnaron las clases dominantes del altiplano. Pero en la memoria de los trabajadores y del pueblo quedó como un hito más en el arduo proceso de construcción de una subjetividad revolucionaria, que hoy reaparece en los cabildos abiertos y en la multiplicidad de las asambleas e instancias colectivas de acción y discusión puestas en práctica por los explotados y los oprimidos de Bolivia, para tomar en sus manos la resolución de sus propios problemas.

¹⁵ Una breve síntesis de las ideas de Thomas circula en castellano bajo el título *La Bolivia del Che (1966/67) y la Bolivia de la Asamblea Popular (1969/71) ¿Guerrilla o revolución obrera y campesina?*, París, Junio 2003.

Bibliografía

- Dunkerley, James, *Rebelión en las venas*, La Paz, Plural, 2003 (1987).
- García Lupo, Rogelio, “Los fusiles y los tanques”, en *Cuadernos de Marcha*, Nro. 51, 1971.
- Gilly, Adolfo, “Los consejos de fábrica en Argentina, Bolivia e Italia”, en *Revista Coyoacán*, Año 2, Nro. 5, México, 1978.
- Lora, Guillermo, *Bolivia: de la Asamblea Popular al golpe fascista*, Buenos Aires, El Yunque, 1972.
- Lozada, Mario, *Nacionalismo, socialismo y clase obrera en Bolivia*, CEAL, 1974.
- Thomas, Jean Baptiste, *La Bolivia del Che (1966/67) y la Bolivia de la Asamblea Popular (1969/71) ¿Guerrilla o revolución obrera y campesina?*, París, Junio 2003.
- Zavaleta Mercado, René, *El Poder Dual*, México, Siglo XXI, 1974.

Fuentes Primarias

- Juan José Torres, Discurso ante la Misión de la Junta Interamericana de Defensa, La Paz, 1969, en *Cuadernos de Marcha* Nro. 51, 1971, pp. 5-55.
- “El Presidente Torres relata como se produjeron los hechos”, *idem ant.*, pp. 88-96
- Documentos de la Asamblea Popular, *idem ant.*, pp. 70-75.
- Manifiesto de los cabos y sargentos del ejército, *idem ant.*, 76-87.
- Tesis Política del IV Congreso de la COB, de mayo de 1970, en Guillermo Lora, *Documentos Políticos de Bolivia*, Tomo II, La Paz, Futuro, 1987, pp. 43-64.
- Documentos de la Asamblea Popular, *idem ant.*, pp. 198-210.
- Alfredo Ovando Candia, Mandato Revolucionario de las Fuerzas Armadas de la Nación, *idem ant.*, pp. 291-296.